



VOL: AÑO 4, NUMERO 11

FECHA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1989

TEMA: TRANSICION Y DEMOCRACIA EN MEXICO: El sistema político hacia fin de siglo

TITULO: **Los actores del sistema político en la percepción universitaria**

AUTOR: *José Antonio Crespo* [*]

SECCION: Artículos

RESUMEN:

En este trabajo se intenta detectar cuál es la postura que tienen los universitarios mexicanos sobre algunos de los principales actores del sistema político mexicano, y cómo cambia a partir de variables tales como el tipo de universidad a la que atienden (pública o privada), su extracción profesional y la aspiración profesional de los alumnos (político oficial, funcionario público, ejecutivo privado, académico o periodista). Ello a partir de una encuesta realizada a 266 alumnos del área de ciencias sociales y políticas, en dos universidades públicas y dos privadas. Los actores del sistema a considerar son el estado como rector de la economía, el sector empresarial, los sindicatos oficiales, los partidos de oposición, la Iglesia católica, la sociedad civil y el propio ciudadano.

TEXTO

El sistema político de una sociedad, vinculado fundamentalmente con la función de tomar decisiones concernientes al conjunto de la comunidad, no está formado exclusivamente por el Estado, cuyas instituciones cumplen directamente la tarea de gobernar a través de sus tres poderes clásicos; legislativo, ejecutivo y judicial, independientemente de que los mismos se encuentren separados o no. El sistema político por tanto, incluye al Estado pero es más amplio que éste, pues comprende a otros actores y organismos que, estando fuera de la estructura estatal, actúan para ejercer algún tipo de influencia sobre el Estado, de modo que éste tome decisiones en una u otra dirección.

En esta categoría están por ejemplo los partidos políticos, la Iglesia, las universidades, las organizaciones empresariales, las confederaciones campesinas, los medios de comunicación, las asociaciones profesionales, las juntas de vecinos, etc. El grado y la forma en que cada uno de estos actores ejerce influencia política sobre el Estado varía de un sistema a otro. En un sistema autoritario, la forma de relación que adoptan estos actores con el Estado es vertical y jerarquizada, de acuerdo a un esquema fomentado y reforzado por el propio Estado, según sus proyectos y necesidades. En el caso mexicano, además se ha integrado al sistema político de modo corporativo, teniendo como cúspide al Presidente de la República y como eje ordenador al partido oficial, mismo que alberga en su seno a un sector obrero, otro campesino y otro que engloba a diversos estratos de la clase media urbana, incluyendo a la burocracia pública. Cada actor cumple dentro de este modelo funciones específicas, asignadas y supervisadas por el Estado en alguna medida de modo de apoyar, o al menos no entorpecer, el funcionamiento del autoritarismo institucional imperante en México desde 1940.

En este trabajo se intenta detectar cuál es la postura que tienen los universitarios mexicanos sobre algunos de los principales actores del sistema político mexicano, y cómo

cambia a partir de variables tales como el tipo de universidad a la que atienden, su extracción socio-profesional y su aspiración profesional [1].

I. La intervención económica del Estado

La Constitución de 1917 proporcionó al Estado amplias facultades para intervenir en la economía para así promover un desarrollo social equitativo, sin que ello signifique eliminar la propiedad privada. La expansión del Estado se fue dando desde los primeros años de la post-revolución hasta culminar en el sexenio de López Portillo con la nacionalización de la banca, en 1982. A partir de ese momento, con De la Madrid, se inició el reflujó de esa expansión, en un propósito gubernamental de adelgazar al Estado y reducir su responsabilidad económica, permitiendo a la iniciativa privada un mayor margen de acción. Ello ha provocado el beneplácito de algunos sectores sociales, que tradicionalmente han considerado que el gobierno no está precisamente capacitado para desempeñar con eficiencia la actividad empresarial, sea por motivos de irresponsabilidad pública, ineptitud o corrupción, o más bien por una combinación de todo ello.

Los números rojos de múltiples empresas paraestatales han servido como fundamento de ese juicio.

Sin embargo, algunas corrientes, principalmente de izquierda, consideran que el compromiso del Estado con los sectores populares lo obligan a jugar un papel dinámico en el economía, so pena de propiciar una mayor concentración de la riqueza de la que de por sí existe. El surgimiento del neocardenismo como fuerza política en 1987 se explica en buena parte como una reacción a la política reprivatizadora de Miguel de la Madrid.

La educación formal en general, socializa a los niños en favor de la "economía mixta"; ni estatización absoluta de la economía, ni capitalismo puro, constituyen para los escolares mexicanos el camino adecuado de desarrollo nacional. Esta convicción crece y se asienta conforme avanza la escolaridad. Sin embargo, para los niños que estudian en centros públicos, que provienen de sectores más humildes, la existencia del Estado benefactor resulta indispensable. Asimismo, la idea de la ineptitud gubernamental para manejar una industria, que disminuye con la escolaridad, está presente en mayor medida entre los estudiantes de institutos públicos [2].

En el caso de los estudiantes universitarios predomina la convicción de que el gobierno no es capaz de manejar eficazmente una empresa (53%). Incluso se incrementa ligeramente con el paso por la universidad. Pero el tránsito de la educación básica a la universitaria incrementó dramáticamente, tanto en el sistema público como en el privado, el porcentaje de quienes consideran al gobierno inepto como empresario [3].

Asimismo, los alumnos de centros privados, al igual que en el ciclo básico, tienen esa idea en menor medida que sus compañeros de universidades públicas. Llama la atención además, que el efecto socializador sobre este aspecto es inverso en cada tipo de institución. En la universidad pública, el paso por la licenciatura se traduce en una disminución de la buena concepción que se tiene del gobierno en materia económica. Ocurre lo opuesto en la universidad particular por lo que, paradójicamente, ésta hace más por mejorar la imagen gubernamental en ese terreno.

No extraña, por otra parte, el observar que los hijos de funcionarios defiendan con mayor decisión el desempeño estatal en la economía. Llama la atención en cambio el alto grado de rechazo que en ese sentido muestran los hijos de obrero. Debe señalarse además que el paso por la universidad no modifica esta actitud de la misma manera en todos los grupos. Sólo entre quienes tienen un padre funcionario, empresario o comerciante, la

educación superior juega en favor del gobierno. En los demás estudiantes la imagen gubernamental en este aspecto se deteriora con la escolaridad.

Cuadro No. 1

Al atender la orientación profesional de los estudiantes, destaca enseguida el contraste entre quienes desean ser políticos del sistema, que por supuesto defienden la destreza gubernamental en el manejo de empresas, y quienes han elegido la academia como campo profesional, que por supuesto no salen en defensa del gobierno. Llama la atención sin embargo el alto sentido crítico de los que piensan incorporarse al sector público, los cuales seguramente fortalecerán dentro del gobierno las filas de los que pugnan por la reprivatización estatal. En general, en todos los grupos (salvo en los futuros periodistas) la universidad fomenta la idea de la ineptitud gubernamental para el manejo de empresas. Incluso los que aspiran a ser políticos se dejan convencer en ese sentido durante sus años universitarios, y en no pequeña proporción (del 31 al 56%).

II. EL sector empresarial

En México, uno de los actores que mayor influencia política han ejercido desde fuera del Estado ha sido desde luego la iniciativa privada. El modelo de desarrollo nacional se ha orientado de modo que la ha favorecido primordialmente, por encima de los intereses de otros grupos sociales pactantes en principio con el Estado revolucionario, como es el caso de obreros y campesinos. Ello ha sido cierto a partir de la presidencia de Miguel Alemán, y aun cuando algunas administraciones han intentado restringir los privilegios del sector empresarial, como fue el caso de Echeverría y López Portillo, en un balance global sin duda ha sido el más beneficiado del modelo de desarrollo económico [4].

Desde luego que la actividad empresarial puede estar asociada a metas de desarrollo social, orientadas a elevar el nivel de vida de la población nacional bajo ciertas condiciones; pero también es cierto que no siempre es así. Respecto de la burguesía latinoamericana- y la mexicana no es la excepción- existe en el ámbito académico la idea generalizada de que no ha tenido un compromiso con los valores nacionalistas y sociales en favor de la colectividad, sino que se ha concentrado fundamentalmente en la promoción y defensa de sus intereses de grupo, por encima de las necesidades de la Nación en su conjunto [5].

Esta visión es ampliamente compartida por los universitarios mexicanos. Al interrogárseles sobre el compromiso de la iniciativa privada con los valores sociales y nacionales de su país, el 73% respondieron negativamente. La universidad además, contribuye a fortalecer esta imagen [6].

Cuadro No. 2

Los hijos de empresarios, aunque mayoritariamente aceptan la falta de compromiso social del sector del que provienen, lo hacen en menor medida que sus compañeros. Y los más críticos en este sentido, como cabía esperar, son los que proceden del sector obrero.

Sin embargo, éste grupo es el único en el que la socialización universitaria modera la crítica hacia los empresarios. Al llegar a la licenciatura, el 100% de estos estudiantes negaban que la iniciativa privada tuviese algún tipo de compromiso social o nacional.

Al abandonar las aulas, ya sólo un 82% mantiene esa idea. En cambio para el resto de los grupos, la educación superior se traduce en un mayor criticismo respecto de la iniciativa privada. Aún dentro de los hijos de empresarios este cambio se da, y de manera drástica;

del 43% que niega nacionalismo al sector empresarial al iniciar sus estudios, cuando están por terminarlos el porcentaje se ha elevado a 81%, lo que habla de un alto sentido autocrítico de estos jóvenes, y un fuerte efecto socializador de la universidad, en este aspecto.

Por otro lado, según la orientación profesional de los estudiantes, puede apreciarse que los futuros políticos defienden a la iniciativa privada con mayor ahínco incluso que quienes quieren desempeñarse profesionalmente en ella. Y los más críticos resultan ser los que muestran una vocación académica y periodística, en ese orden, lo cual es normal. De nuevo, en todos los casos la universidad contribuye a incrementar el nivel de crítica respecto del sector empresarial. La única excepción son los académicos, cuyo alto nivel de crítica al iniciar sus estudios se modera ligeramente. Y quienes desean trabajar dentro de la propia iniciativa privada se abren a la crítica durante su licenciatura, pues el porcentaje de quienes rechazan el compromiso social del sector empresarial se eleva del 43 al 81%. El impacto de la socialización universitaria en este caso, es sorprendente.

III. El sindicalismo oficial

El autoritarismo institucional prevaleciente en nuestro país se distingue de otros casos por su carácter corporativo, que abre canales de participación dirigida, a numerosos sectores organizados ejerciendo al mismo tiempo control político sobre éstos. La estabilidad política del sistema se ha fundado sobre esta forma de organización [7].

El control de los sindicatos por parte del Estado, y su incorporación al partido oficial, forma parte de este esquema. Ello ha permitido moderar las demandas del sector obrero según las necesidades del proyecto gubernamental de desarrollo, en cada administración. La democratización del régimen exigiría, eventualmente, la autonomía de las organizaciones sindicales. Sin embargo, hay sectores que ven con desconfianza esta posibilidad, tanto por razones de tipo político como económico.

Entre los niños mexicanos, la escolaridad incrementa la conciencia y el rechazo del charrismo sindical en casi todos los grupos de extracción socio-profesional, menos en los hijos de funcionarios en quienes disminuye [8]. Esta visión continúa incrementándose posteriormente, al menos en el caso de las universidades privadas, pues el porcentaje de quienes ven en la corrupción de los líderes (derivada por supuesto del control sindical) el principal problema de los sindicatos, pasa del 18% en secundaria, el 59% en el ciclo universitario [9].

Cuando a los universitarios se les ha preguntado específicamente si es conveniente y necesario que los sindicatos permanezcan bajo control estatal para mantener la estabilidad social y económica, un 66% ha expresado su negativa, frente a un 21% que sí ve adecuado el control sindical. No hay diferencia sustantiva entre el sistema público y el privado. Y el paso por la universidad juega en favor de la independencia sindical, aunque de manera ligeramente más clara en el caso de los centros privados.

Por su parte, son los hijos de empresarios los que muestran una mayor aceptación del control sindical, como era de esperarse, pese a que no era así cuando niños [10]. El paso del tiempo les ha hecho ver la conveniencia de que los sindicatos se mantengan bajo la tutela estatal, desde el punto de vista de sus intereses de clase. Son en cambio los empleados y obreros, principales víctimas del corporativismo, quienes menos lo consideran necesario para la buena marcha del país. En todos los grupos la universidad ejerce un efecto favorable a la autonomía sindical, aunque con distinta intensidad. Destaca el caso de los empresarios, cuyas simpatías por el control sindical disminuyen drásticamente (del 44 al 11%). Lo mismo sucede entre los hijos de obrero (del 33 al 9%)

algunos de los cuales al acceder a la educación superior aceptaban de buen grado (o como algo inevitable) el que los sindicatos formen parte de la estructura corporativa del Estado.

Según la aspiración profesional de los estudiantes, puede observarse que los principales defensores del control sindical son los futuros políticos, en franco contraste con quienes ven en la academia un posible campo de desarrollo profesional. En todos los grupos, sin embargo, la universidad también actúa para disminuir los apoyos en favor del corporativismo estatal, aún entre quienes desean ser políticos del sistema, cuyo apoyo al control sindical se reduce del 46 al 11%. En suma, la universidad -tanto privada como pública- apoya significativamente la autonomía sindical y, puede inferirse, la de otras organizaciones y grupos profesionales. Su efecto socializador, en lo que hace a este aspecto, es claramente democrático y sumamente eficaz.

Cuadro No. 3

IV. Los partidos de oposición

En un sistema de partido hegemónico, como lo es el mexicano, la existencia formal de partidos de oposición contribuye a generar un tipo de legitimidad democrática, pero no implica que la oposición pueda desafiar en términos reales la hegemonía del partido oficial. De lo que se desprende que, en la medida en que se rechace la competitividad real del sistema de partidos, la oposición partidista puede ser también objeto de rechazo o indiferencia. Algunos ciudadanos ven en la oposición la posibilidad para presionar al partido en el poder, pero sin abrigar seriamente deseos de que la oposición acceda al poder. Son pocos los que en general consideran deseable el gobierno formado por alguna de las oposiciones [11]. De la confirmación de la impotencia de los partidos opositores en materia electoral, fácilmente se puede pasar a un desprecio, viéndolos como comparsas de una farsa democrática, o en el mejor de los casos, como ilusos idealistas [12].

Los universitarios mexicanos consideran mayoritariamente que el sistema de partidos vigente en México es el hegemónico (56%). Una proporción menor (38%) piensa que los partidos de oposición pueden influir de alguna manera en las decisiones nacionales, aunque no puedan formar gobierno, y sólo un reducido grupo (4%) percibe al sistema de partidos como completamente competitivo. El paso por la universidad modifica sólo ligeramente la percepción sobre el sistema de partidos; se incrementa en 4 puntos porcentuales la proporción de quienes lo ven como uno carente de cualquier competitividad.

En lo que respecta a su postura frente a los partidos de oposición, se les preguntó si creen conveniente su acceso al poder (respaldo), si los creen sinceros en sus intenciones pero no ven conveniente que formen gobierno (tolerancia), o si de hecho los consideran como francamente deshonestos y oportunistas (rechazo). En el primer caso se encuentra sólo un 11% de los estudiantes; en el segundo un 70%, mientras que un 17% se ubica en el último caso. El rechazo abierto a la oposición partidista se encuentra en mayor proporción en la universidad pública. La socialización universitaria reduce la hostilidad hacia los partidos opositores, aunque de manera mucho más marcada en el caso de las instituciones privadas. Sin embargo, también la universidad convence a los alumnos de lo poco conveniente que resultaría un gobierno formado por la oposición, y de nuevo, en mayor grado en los centros públicos.

La ocupación del padre tiene gran peso en la visión que los alumnos presentan de la oposición. Los estratos superiores son los que menos desean su gobierno, en particular los hijos de funcionarios, que contrastan con los de profesionista, en los que además la

universidad incrementa su apoyo abierto por la oposición (lo mismo que en obreros), al contrario de lo que ocurre con los demás grupos. En general, en todos los casos el rechazo abierto a los partidos opositores disminuye, incluyendo a los hijos de funcionarios.

Cuadro No. 4

La futura profesión del alumnado condiciona también con claridad su postura frente a la oposición formal. La consistente postura crítica de quienes desean ser periodistas se refleja en un mayor apoyo abierto a la oposición, y menor rechazo. El escepticismo de los académicos en ciernes, se traduce en un rechazo abierto por la oposición, si bien ello no supone tampoco un apoyo al partido oficial. Se trata más bien de una desconfianza por el sistema de partidos en general. La función socializadora de la universidad, por otra parte, se traduce en un mayor respaldo por la oposición entre los estudiantes con vocación académica y periodista. En cambio, entre quienes prefieren hacer carrera política o desean desempeñarse en el sector privado, se incrementa el número de los que ven a los opositores con malos ojos. La predisposición que las ambiciones profesionales generan en torno a los partidos de oposición, se impone de nuevo a la objetividad que la universidad pretende proyectar de la realidad política, al menos por principio.

El rechazo a los partidos de oposición, por otra parte, puede ser reflejo de una desconfianza hacia el sistema de partidos en su conjunto. Mientras menos competitividad se le conceda, mayor será desde esta perspectiva el rechazo a la oposición partidista, que acepta participar en un juego en el que tiene la partida perdida de antemano. También quien se sienta identificado con el régimen y su partido tenderá a mostrar mayor repudio por la oposición, comportamiento distinto al que normalmente podría encontrarse en un sistema democrático, en donde la oposición al menos puede recibir respeto de parte del adversario.

Cuadro No. 5

Se puede decir en ese sentido, que la oposición partidista ha sido víctima del sistema autoritario, no sólo desde el punto de vista legal y electoral [13], sino también en términos de los efectos que aquel produce en la cultura política ciudadana, lo cual ha contribuido a mantenerla en una situación de debilidad política permanente. Eso al menos hasta julio de 1988, en que la ciudadanía votó en gran proporción (48%) por la oposición, pese a la desconfianza imperante hacia ella, lo que puede significar que empieza a invertirse la tendencia según la cual el PRI era visto como un mal menor.

V. La Iglesia

La fuerza e influencia de la Iglesia Católica en la historia de América Latina ha sido de tal magnitud, que necesariamente ha dejado su huella en la cultura política de nuestros pueblos. No puede entenderse de hecho, la realidad latinoamericana sin la trayectoria de la institución eclesiástica y de sus relaciones con el Estado y la sociedad [14]. La historia de estas relaciones ha sido conflictiva y tirante, toda vez que la Iglesia ha representado tradicionalmente un obstáculo a la modernización integral de la sociedad, objetivo fundamental de los Estados seculares desde la independencia de los países que conforman el subcontinente. Generalmente, se ubica a la alta jerarquía eclesiástica con los grupos y sectores más conservadores de la sociedad latinoamericana, en un esfuerzo por mantener sus privilegios e influencia, que se han visto amenazados y mermados por la secularización social. El Estado moderno exige, entre otras cosas, su completa separación de la Iglesia, así como la libertad de cultos, lo que termina con la posibilidad de una religión de Estado, que caracterizó al régimen colonial. No obstante, algunos

miembros del clero, sobre todo del bajo clero, no sólo han rechazado esta postura conservadora, sino que incluso han concebido una función eclesial de cambio social y apoyo a las reivindicaciones de los sectores populares de sus respectivos países, en una visión progresista del cristianismo y sus órganos institucionales. De modo que la Iglesia puede concebirse como agente de conservación o de cambio social, o bien ubicarla en una postura neutral y alejada de toda actividad política, de acuerdo a la mejor tradición liberal.

En México, las relaciones entre Iglesia y Estado, sobre todo en los períodos en que éste fue controlado por los grupos liberales, han sido sumamente difíciles, llegando en más de una ocasión a la confrontación abierta entre el gobierno y la feligresía católica. A la postre se impuso la visión liberal del Estado, si bien no se cumplen a la letra las disposiciones constitucionales tendientes a limitar la participación de la Iglesia en la vida social y política del país. Aun así, la influencia política de la Iglesia se ha reducido drásticamente. Así lo reconocen los mexicanos desde sus años escolares [15]. Como quiera, la crisis de legitimidad en que ha caído el régimen desde 1982, y la postura crítica que ha asumido la Iglesia frente a la corrupción gubernamental, el fraude electoral y el autoritarismo en general, se han traducido en un relativo fortalecimiento de la institución eclesial [16]. Ello, aunado al hecho de que el 90% de los mexicanos se declaran católicos y de que confían más en la Iglesia (y en la educación) que en ninguna otra institución social [17], plantean la posibilidad de que se reestructuren sus relaciones con el Estado. De hecho el Lic. Salinas de Gortari poco después de asumir la Presidencia de la República, así lo anunció, en lo que numerosos observadores han interpretado como un intento del Presidente por legitimarse frente a la sociedad de esa manera, a falta de la legitimización por las urnas, que no pudo obtener.

A los universitarios se les ha preguntado cuál, a su juicio, debería ser la función política de la Iglesia; mantenerse alejada de la política (postura liberal), apoyar activamente los movimientos de reivindicación popular (postura progresista), o intentar formar parte del Estado y compartir sus funciones (postura conservadora). El 83% de los estudiantes sostiene la postura liberal. La socialización laica del Estado tuvo éxito en convencer a la ciudadanía de la necesidad de separar a la Iglesia de los asuntos políticos. Sólo el 13%, por otra parte, desea que la Iglesia adopte una postura progresista, en favor del pueblo, y un reducido 4% desea su participación en las tareas estatales. La universidad, sin embargo, socializa en favor de la política progresista de la Iglesia en detrimento de la neutralidad liberal. Llama la atención, por otra parte, que en la universidad privada sea mayor la proporción de quienes desean una Iglesia en favor del pueblo, que además se duplica como consecuencia de los estudios superiores. La explicación más probable de esto es que buena parte de los alumnos entrevistados pertenecen a la Universidad Iberoamericana, en donde prevalece una postura progresista. Si se toman otras universidades privadas, los resultados son distintos [18].

Por otra parte, los que más pugnan por una posición progresista de la Iglesia son funcionarios y empleados, y los más conservadores son comerciantes y empresarios, en ese orden. No sorprende la posición liberal de los profesionistas. En todos los grupos la universidad socializa en favor del progresismo clerical. En el caso de los obreros es grande el cambio en ese sentido, pues va del 9 al 185%. En empresarios y comerciantes también aumenta esta postura, pero a la par crece el conservadurismo, en detrimento de la posición liberal.

Cuadro No. 6

Por otro lado, son los grupos de aspiración profesional más contrarios al régimen -los académicos y periodistas- los que lógicamente pugnan por un papel más combativo de la

Iglesia en favor de las causas populares. El paso por la universidad estimula enormemente esa posición en estos grupos. Destaca el caso de los aspirantes a periodista, que al ingresar al ciclo universitario sólo el 6% mantienen esa postura; al terminar, un 56% piensa que tal debería ser la política de la Iglesia. En cambio los estudios superiores generan una posición conservadora entre los futuros políticos y directivos de la iniciativa privada, aunque en proporciones reducidas. Como quiera, la cercanía con el régimen está asociado en alguna medida con el deseo de ver a la jerarquía eclesiástica más cerca del Estado.

VI. El ciudadano frente a la sociedad

Un elemento clave de la cultura política es la percepción que el ciudadano tiene de sí mismo como actor político y de sus relaciones con otros ciudadanos, con el poder y con la nación. La confianza ciudadana es un requisito de la democracia política, pues implica un sentido de cooperación que contribuye a la organización cívica en defensa de sus intereses frente al poder. La desconfianza mutua sería el resultado lógico de un sistema autoritario, donde la ley no prevalece, y en el que la iniciativa ciudadana tiene pocas probabilidades de obtener frutos. Resultado; una sociedad apática y desconfiada, y un reducido sentido de cooperación y eficacia política, terreno fértil para la continuidad del autoritarismo. Aunque hay indicios de que ello está cambiando, y de que la sociedad civil empieza a ser consciente de sus posibilidades políticas, en general sigue prevaleciendo la cultura cívica de la desconfianza frente a los distintos actores políticos, y la búsqueda individual y aislada de la solución de problemas [19].

En ese sentido, uno de los indicios de la desconfianza ciudadana es el nivel de corrupción que se considera existente, no sólo entre gobernantes sino también en la sociedad civil. Es decir, en la medida en que prevalece esta imagen, quiere decir que se está jugando sobre la regla de que, quien pueda hacer trampa, la hará; la honestidad resulta irracional en esas condiciones [20]. Los gobernantes, de vez en vez y como medio de auto-defensa, recuerdan que la corrupción no se limita a los políticos, que todos participan de ella. Recuérdese la sentencia de López Portillo en el sentido de que muchas primeras piedras han sido lanzadas al gobierno, en materia de corrupción. La visión que prevalece en el extranjero de la sociedad mexicana también considera que la mayoría de los ciudadanos participa de la corrupción, en mayor o menor medida [21].

¿Cómo ven las cosas los universitarios? El 90% de ellos considera que, en efecto, la sociedad en su conjunto participa de la corrupción, mientras que un 6% cree que sólo algunos funcionarios aislados recurren a tal práctica. No hay cambio significativo a causa de los años universitarios, y en las instituciones privadas hay mejor conciencia de la generalidad de la corrupción. Es de suponer que los críticos del gobierno tiendan a exculpar a la sociedad civil de tal conducta, haciendo sólo a los funcionarios cómplices de la corrupción.

Puede apreciarse en el cuadro 7 que los grupos de menor prestigio social, y en general más críticos del gobierno, exculpan en mayor medida a la sociedad civil de incurrir en corrupción. La universidad se traduce en una mayor condescendencia hacia el gobierno; aumentan quienes consideran que la corrupción no se limita a unos pocos funcionarios. Entre los hijos de profesionistas, la conciencia de que la corrupción está extendida a toda la sociedad se hace plena; el 100% opina eso al terminar sus estudios. Y a los hijos de obrero, la universidad los convence en gran proporción de que la sociedad no está exenta del mal; quienes así lo declaran pasan del 33 al 82%, como consecuencia de la educación superior.

Cuadro No. 7

Por una parte, los alumnos que desean convertirse en políticos del sistema, en bloque reconocen que la corrupción está extendida en toda la sociedad. Ello no debe entenderse necesariamente como un mayor realismo de su parte. Es posible que la postura que sólo hace partícipe de la corrupción a unos cuantos funcionarios les parezca insostenible ante la evidente extensión de las prácticas ilícitas dentro del sector público, y por ello tiendan a exculparlos haciendo corresponsables a toda la ciudadanía, como hacen frecuentemente los políticos a través de su discurso. En cambio, los más críticos del gobierno tienden a limitar la extensión de la corrupción a la esfera gubernamental, aunque en una proporción reducida. En general la universidad crea conciencia en todas estas categorías, de que el peculado es en realidad un fenómeno vigente en la mayoría de las instituciones sociales, tanto dentro como fuera del sector público.

VII. El ciudadano frente a la política

La cultura política derivada del autoritarismo se caracteriza también por la desconfianza ciudadana hacia la política en general. No se le ve como una actividad de servicio público, sino una en que prevalecen los intereses personalistas de los participantes, y en que la falta de escrúpulos es la norma, más que la excepción. Según una encuesta nacional, el 88% de los ciudadanos consideran que "los políticos se preocupan más de si mismos que de los problemas de la gente común y corriente" [22]. En otro estudio sobre la jerarquía de confiabilidad de las instituciones sociales, policía, legisladores y burócratas se encuentran en el fondo de la escala [23].

Para medir la confianza de los estudiantes en la política, se les ha preguntado si creen que la falta de escrúpulos es una norma en la política oficial, y para evaluar su grado de confianza en el gobierno, se les interrogó si la honestidad y sinceridad de la administración en turno (De la Madrid) eran superiores al del gobierno anterior, tal y como lo indicaba el discurso oficial. En el cuadro 8 se puede observar de inmediato el bajo nivel de confianza pública entre los alumnos; pese a que buena parte de ellos piensa hacer carrera en el Estado (45%), la mayoría (70%) considera que la política oficial exige la falta de escrúpulos en alguna medida para tener éxito. La universidad estatal refleja un grado menor de confianza pública, en ambos indicadores. Por otra parte, el paso por la universidad disminuye la desconfianza hacia la política, pero la aumenta respecto de la renovación gubernamental. ¿Cómo explicar esto? Se puede suponer que el mensaje que prevalece en la universidad en este sentido, es fundamentalmente crítico (más en la pública que en la privada). Pero lo concerniente a la forma en que se hace política afecta directamente los intereses profesionales de los estudiantes. Cuando están por incorporarse al mercado de trabajo, les conviene pensar que se puede hacer carrera política sin traicionar sus principios morales. En cambio, en nada les perjudica reconocer que el gobierno delamadridista no haya cumplido su promesa de renovación moral. No es casualidad que en todas las variables, se condene en menor medida la práctica política en general, que la práctica concreta de un gobierno.

Cuadro No. 8

Por otra parte, puede observarse mayor confianza pública en los estratos socio-profesionales de más prestigio, y en los grupos de aspiración profesional más allegados al Estado; lo que nos sugiere de nuevo la existencia de un proceso de racionalización política en los alumnos más interesados en el poder, con miras a paliar contradicciones internas.

VIII. El ciudadano frente a la nación

El estudio de la percepción ciudadana hacia la nación busca precisar su grado de identificación con la comunidad política a la que se pertenece, así como la aceptación de sus símbolos y valores. El nacionalismo, sin embargo, presenta diversas acepciones, entre las que se encuentran las siguientes:

- a) Amor a un suelo, raza o historia cultural común,
- b) Deseo de independencia política, seguridad y prestigio de la nación.
- c) Devoción mística hacia la organización social, concebida ésta como algo diferente a la suma de sus miembros.
- d) El dogma de que un individuo vive para la nación, y que ésta es un fin en sí mismo.
- e) La indiferencia o agresividad hacia grupos extranjeros.
- f) El deseo o sentimiento de superioridad respecto de otras naciones [24].

Desde luego, una o varias de estas acepciones pueden combinarse y transformarse, en distintos momentos históricos de una nación. Pero en todas ellas subsiste cierta noción de equilibrio entre el interés particular de los ciudadanos y el de la colectividad, la solidaridad entre los miembros de la nación y la defensa de la comunidad frente a terceros [25].

En México, el nacionalismo se ha desarrollado como solución mínima de existencia de la comunidad, frente a la heterogeneidad del país, primero, y frente a las amenazas provenientes del exterior. El Estado, que se ha erigido como el consecutor de esos dos objetivos, ha reclamado para sí la legitimidad de tipo nacionalista que se deriva del cumplimiento de esas metas vitales para la nación [26]. El nacionalismo, como quiera, requiere de mitos que hagan pasar desapercibidas ciertas diferencias reales entre los mexicanos. La unidad nacional entre clases y razas ha sido uno de estos mitos. La escuela formal, aunque socializa en ese sentido, no puede hacer gran cosa para evitar que, a la postre, los escolares se percaten de que tal unidad no es tan sólida [27]. Lo cual no obsta para que la gran mayoría de los mexicanos se sientan orgullosos de serlo [28].

De los diversos aspectos y actitudes que conforman el sentimiento nacionalista, uno de central importancia es la promoción y defensa de la soberanía económica de la nación. Así, las acciones y estrategias encaminadas a fortalecerla, son consideradas como parte de un proyecto nacionalista. Las medidas que puedan debilitar esa soberanía pueden ser en cambio tomadas como contrarias al espíritu nacionalista. Entre ellas está, por ejemplo, enviar capital fuera del país, medida que suele ser justificada en términos de la falta de confiabilidad en el gobierno y su política económica. En efecto, la racionalidad económica exige un mínimo de racionalidad jurídica que permita a los actores económicos saber con precisión las condiciones y reglas del juego [29]. Como sea, la fuga de capitales no deja de tener efectos desastrosos para la soberanía económica del país, y para el interés colectivo.

Se ha preguntado en ese sentido a los alumnos si consideran justificable el sacar dinero del país, en términos de una legítima defensa del patrimonio personal. Sólo un 30% de ellos lo cree así. La universidad pública socializa en contra de esa actitud (del 32 al 17%); la privada no logra una alteración significativa de ella.

En el cuadro 9 puede notarse de nueva cuenta que la ideología no es ajena a los intereses particulares de la gente. También sucede con respecto al nacionalismo. Los grupos que más recursos monetarios tienen, o esperan tener, son los más dispuestos a defenderlos, incluso por encima del interés nacional. Debe decirse que la universidad provoca un efecto nacionalista en casi todos los grupos socio-profesionales; la excepción son los hijos de funcionarios y de profesionistas que, con el paso por la universidad, quedaron más convencidos de que es legítimo mandar el dinero a otros países. El caso de los hijos de empresarios llama la atención; siendo los que al llegar al ciclo superior más

defendían la salida de capital (50%), al terminar sus estudios son los que menos mantienen una postura apologética en ese sentido (11%).

Cuadro No. 9

En lo que hace a las expectativas profesionales de los alumnos, puede apreciarse que quienes pretenden ejercer el liderazgo político de la nación son los más proclives a justificar la salida de capitales. Ello, pese a que el discurso gubernamental insiste de manera permanente en que tal acción constituye una deslealtad a la nación. Recuérdese que López Portillo, en su último informe presidencial, fustigó a los "sacadólares" como los principales responsables de la debacle económica que se inició ese año, y los acusó de antipatriotas [30]. Son en cambio quienes tendrán una mayor autonomía respecto del Estado, los que mantienen una postura más nacionalista en este terreno, aunque son también los que menos expectativas tienen de hacer fortuna en su campo profesional. Tal vez por ello no acarician seriamente la idea de acumular capital que proteger en los bancos extranjeros. Como sea, en lo que toca a esta variable, la universidad provoca en todos los grupos una mayor conciencia de que la fuga de capitales contraviene el interés nacional.

IX. Responsabilidad de los actores en la crisis económica

Cuando en 1982 quedó claro que la política económica seguida por López Portillo entró en un callejón sin salida, y que por tanto el modelo de desarrollo emprendido por la élite priísta desde la década de los cuarenta llegaba a su límite, se desató la guerra verbal entre distintos actores del sistema político, haciéndose mutuamente responsables de lo sucedido. El mismo López Portillo, en un intento por minimizar su propia responsabilidad en lo ocurrido, declaró que a él se le podía imputar el manejo del timón, pero no la existencia de la tormenta. También culpó a los "saca-dólares", los banqueros y los malos mexicanos, de que no le respondieron adecuadamente. La ciudadanía, por su lado, y el sector empresarial, cargaron con la mayor parte de la culpa del despilfarro de recursos, la corrupción y la irresponsabilidad gubernamental. Muchos funcionarios no dejan de responsabilizar también a la apatía y desgano de la ciudadanía en la solución de los problemas nacionales. Y el anti-imperialismo, por supuesto, también salió a la luz para acusar a las potencias industriales, y en particular a los Estados Unidos, de haber provocado la zozobra de nuestro proyecto económico. En verdad que todos esos factores tienen alguna participación en la explicación del fenómeno, aunque con peso variable, difícil de precisar. Pero el caso es que cada uno de los actores tiende a disminuir su propia responsabilidad, enfatizando la de los demás.

¿A quiénes hacen los estudiantes universitarios el principal responsable de la crisis de 1982? La mayoría (40%), piensa que el gobierno. Enseguida viene el grupo que hace corresponsable de la debacle a toda la ciudadanía (23%), y detrás, los que creen que es culpa de las potencias extranjeras (15%). Después vienen quienes piensan que no hay un responsable único (14%) y finalmente, los que culpan a la iniciativa privada (8%). Por supuesto, hay variables sociológicas detrás de estas percepciones, que conviene indagar.

En ambos tipos de institución, el gobierno es señalado con mayor responsabilidad en la crisis; a fin de cuentas, controla el aparato decisorio. Pero en la universidad pública el juicio es más severo; también en lo que toca a la iniciativa privada. En cambio, en el sistema privado se enfatiza la apatía ciudadana. Por otro lado, aunque tanto al inicio como al fin del ciclo superior los alumnos responsabilizan en mayor grado al gobierno, el paso por la universidad reduce en general el juicio contra algún actor en particular, incrementándose, aunque no mucho, la convicción de que el fenómeno es tan complejo que la responsabilidad no puede imputársele a un sólo factor.

Cuadro No. 10

Respecto de la ocupación del padre, se puede apreciar con claridad que cada grupo tiende a culpar a los demás. Los sectores de mayor status responsabilizan a la ciudadanía en general (puede leerse pueblo) en mayor grado. En cambio, los sectores más humildes disminuyen esa responsabilidad y la imputan tanto al gobierno como a la iniciativa privada. Los hijos de profesionistas son los más escépticos respecto de la parte que juegan las potencias en todo esto; al menos no le conceden el papel protagónico. Los hijos de funcionarios, en cambio, son los más interesados en ubicar la mayor causa de la crisis fuera de nuestras fronteras.

Por otra parte, los futuros políticos del sistema sienten que la mayor responsabilidad recae en la ciudadanía, minimizando la del sector al que aspiran pertenecer. El juicio al gobierno, en cambio, no es tan benévolo por parte de quienes desean integrarse al aparato administrativo del Estado. Su autonomía de juicio es sorprendente frente a los que desean hacer carrera política. Los aspirantes a la academia, por su parte, son los que creen en mucho mayor medida que los demás que no hay único responsable en todo esto. La importancia que tendrá en su carrera el esfuerzo por la objetividad parece hacerse presente ahora (aunque no en todos los indicadores sucede así). Y los posibles periodistas, los más críticos de todos como siempre, son los que mantienen una postura más antigubernamental, antiempresarial y antiimperialista. En cambio, exculpan casi completamente a la ciudadanía en el surgimiento de la crisis económica. De acuerdo con su visión, son los factores reales de poder los que tienen que rendir cuentas de lo acontecido, y no la masa informe, que no cuenta en México con los canales para hacerse oír y participar significativamente en la formulación de las políticas públicas.

Conclusiones

El mensaje universitario parece ser en general crítico respecto de los principales actores del sistema político mexicano. Con los estudios superiores se agudiza el espíritu crítico de los estudiantes. Manteniendo constante las demás variables aquí consideradas, la socialización universitaria se traduce en una imagen más desfavorable hacia el gobierno en lo que hace a su eficacia económica y administrativa; incrementa el cuestionamiento respecto del compromiso social y nacionalista de la iniciativa privada; aumenta la desconfianza hacia los partidos de oposición, aunque a la par que la tolerancia para con ellos; disminuye la convicción de que el Estado tiene que controlar a los sindicatos para mantener la estabilidad; fomenta la idea de que la Iglesia debe salir de su neutralidad para participar en la vida política y social del país, preferentemente en favor de las clases necesitadas; contribuye a crear conciencia respecto a la existencia de la corrupción en toda la sociedad y no sólo en el gobierno; genera dudas sobre la eficacia del proceso de renovación sexenal en relación a la honestidad y sinceridad de la élite política, pero en cambio no estimula el rechazo hacia los medios cotidianos de hacer política en México; fortalece la convicción de que sacar capitales del país va en contra del interés nacional; y por último reduce la idea de que a algún actor en particular del sistema político se le deba imputar la mayor responsabilidad en la crisis económica.

De modo que en un balance global sobre la percepción que de los actores contribuye a formar la universidad, debe decirse que eleva el criticismo, el sentido de responsabilidad, y el espíritu democrático y nacionalista, en alguna medida. No obstante cabe notar que el cambio, aunque perceptible, no es realmente dramático. Los valores con los que llegan los estudiantes, heredados de sus familias y formados por otros agentes de socialización, no son fáciles de modificar y menos aún de remover. El esfuerzo de la institución universitaria por fomentar valores críticos, democráticos y nacionalistas en aquellos que

integrarán las élites nacionales es importante; sin embargo sus resultados son más bien magros, tomando en cuenta que se trata de estudiantes de carreras sociales y políticas, en las que los temas aquí tratados se revisan a profundidad y, la mayoría de las veces, con un sentido profundamente crítico (aunque desde una perspectiva plural, como corresponde a la universidad). Probablemente en otras carreras el efecto socializador de la universidad en materia política y social es mucho menor; incluso inexistente.

Por otra parte, debe notarse la brecha entre la cultura política de la universidad pública y la privada en muchos de los indicadores. En general, las instituciones públicas son más escépticas respecto de la capacidad administrativa del gobierno, del espíritu nacionalista del sector privado, de la sinceridad de la oposición formal, de la conveniencia de que la Iglesia participe en política, de la honestidad del gobierno en turno, de la legitimidad de la política oficial en sus actuales términos, y de la licitud de enviar dinero al exterior. También creen los estudiantes de los centros públicos que el gobierno y la iniciativa privada tienen mayor responsabilidad en la crisis económica de lo que les imputan sus homólogos de instituciones privadas. Es decir, en este tipo de universidad prevalece un sentido más crítico hacia el sistema político y sus protagonistas. La distancia que la separa en este sentido de la universidad privada no es realmente muy grande, pero sí consistente.

Sin embargo, son las variables referentes a la ocupación del padre, y sobre todo, a la aspiración profesional de los alumnos, las que más marcan las diferencias entre ellos. El análisis de las creencias y actitudes de los estudiantes a partir de estas variables reflejan con claridad que la asimilación del mensaje universitario responde más a los intereses familiares o personales que a otra cosa. Las ideologías, en realidad, reflejan intereses concretos más que convicciones abstractas. De ahí que la diferencia registrada entre universidad pública y privada responda en mayor grado a la extracción social de su respectivo alumnado que a la acción socializadora de cada tipo de institución, si bien no puede pasarse por alto que el contenido didáctico en los centros públicos suele ser más crítico, y sobre todo, más radical.

Pese a ello, la universidad como agente socializador difícilmente, y sólo en casos excepcionales, puede prevalecer sobre otros agentes como la familia o el trabajo en que posteriormente se desempeñará el alumno. De hecho, los intereses profesionales empiezan a actuar desde la misma universidad en la formación de la percepción política y social que conviene al alumno para adaptarse a su ambiente de trabajo.

CITAS:

[*] Profesor e investigador del Depto. de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Colaborador de Nexos.

[1] A través de una encuesta realizada en otoño de 1986, en cuatro universidades capitalinas (UNAM, UAM, Iberoamericana e ITAM) a 266 estudiantes del área de ciencias sociales y políticas.

[2] Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, El Colegio de México, México, p. 135.

[3] En 3o. de secundaria quienes así opinaban eran cerca del 22% frente al 53% en la universidad. Cfr. Segovia, *ibid.*

[4] Roger Hansen, señala incluso que "...no ha habido otro sistema político latinoamericano que proporcione más recompensas a sus nuevas élites industrial y

agrícola comercial", y llama el gobierno mexicano un "gobierno de los hombres de negocios". La política del desarrollo mexicano, Siglo XXI, México, 1979, p. 128 y 117.

[5] Cfr. Olac Fuentes Molinar, "Vieja y nueva derecha", en J. Alcocer (comp.), México, presente y futuro, Ed. de Cultura Popular, 1985, y Pablo González Casanova, "Democracia en tiempos de crisis", en Las elecciones en México; evolución y perspectivas, Siglo XXI, México, 1985.

Claudio Veliz, por su parte, apunta al respecto: "En Estados Unidos y Europa, los dinámicos grupos empresariales, por varias razones, se erigen en la principal fuerza de una política de desarrollo acorde con las aspiraciones nacionales; en Latinoamérica, sin embargo, los dueños de la industria son altamente responsables al aumento de nuestra dependencia externa". "Centralism and Nationalism in Latin America", en Howard Wiarda (Ed), Politics an Social Change en Latin America; the Distinc Tradition, U. de Massachuset Press, 1974.

[6] Sin embargo la mayoría de ellos, al menos en las universidades privadas (86%), considera que el progreso de México se debe más a los hombres de empresa que al gobierno, aunque reconocen que esta visión obedece más al rechazo que se experimenta por el gobierno que al desempeño real de los empresarios en el desarrollo nacional. Cfr. Martha Callejas y Rosa Isabel Montes, "Actitudes políticas de los estudiantes de universidades privadas del Distrito Federal", México, Tesis de Licenciatura, U.I.A., 1988, p. 91.

[7] Cfr. José Luis Reyna, "Movilización y participación política: discusión de algunas hipótesis para el caso mexicano", en El Perfil de México en 1989, V. 3, Siglo XXI, México, 1972, pp. 505-535.

[8] Segovia, op. cit., p. 76.

[9] M. Callejas y R. I. Montes, op. cit., p. 88.

[10] Segovia, op. cit., p. 76.

[11] Cfr. Booth, J. y Seligson, M., "The Political Culture of Authoritarianism in Mexico; A Reexamination", en Latin American Research Review, Vol. 19, No. 1, 1984.

[12] Un 71% de la ciudadanía no manifestó simpatías por ningún partido político, según Hernández Medina y Narro Rodríguez (coords.), Cómo somos los mexicanos, CREA y C.E.E., México, 1987, p. 106. Lo que refleja una clara desconfianza por el sistema de partidos en su conjunto. Los partidos de oposición, desde luego, consiguen menos simpatías que el oficial, según la misma encuesta.

Entre alumnos de universidades privadas, el 41% cree que ningún partido es capaz de promover el bienestar nacional, lo que refleja también un desprecio por el sistema de partidos en general. M. Callejas y R.I. Montes, op. cit., p. 139.

Ello contrasta con la idea que del sistema de partidos tienen los niños, de los cuales sólo un 10% quieren su desaparición. Segovia, op. cit., p. 67.

[13] Cfr. Juan Molinar, "La asfixia electoral" en Varios, México; el reclamo democrático, Siglo XXI-ILET, México, 1988, pp. 169-259.

[14] Cfr. Ivan Vallier, "Las élites religiosas en América Latina; catolicismo, liderazgo y cambio social", en Lipset y Solari (Coord.), *Elites y desarrollo en América Latina*, pp. 150-1889.

[15] Segovia, op. cit., p. 112.

[16] Cfr. René Delgado, "Iglesia, Estado; entre el gendarme generoso y el delincuente popular", en *México; el reclamo democrático*, op. cit., pp. 175-185.

[17] Iván Zavala, "Valores políticos", en Alberto Hernández y Luis Narro, op. cit, p. 110.

[18] Cfr. M. Callejas y R.I. Montes, op. cit.

[19] Alberto Alvarez reporta que el 82% de ciudadanos desconfía de los demás, que el 70% no cree que la gente esté más dispuesta a ayudar a otros, y que el 58% no participa en ninguna asociación u organización formal. En "Cómo se sienten los mexicanos" en Hernández y Narro, op. cit., pp. 81-87.

[20] Cfr. Gabriel Zaid, "La propiedad privada de las funciones públicas", en *La Economía Presidencial, Vuelta, México, 1987*.

[21] Alan Riding señala que "Decir que toda la sociedad mexicana es corrupta es una exageración; no obstante la corrupción está presente en todas las regiones y sectores del país", en *Vecinos distantes; un retrato de los mexicanos*, Joaquín Mortiz-Planeta, México, 1984, p. 151.

[22] Bendixen and Law, "Estudio sobre la actualidad nacional mexicana", en *El perfil de la Jornada*, 5 de julio, 1988.

[23] Iván Zavala, op. cit., p. 110.

[24] Boyd Shafen, "Towards a Definition of Nationalism", en James (Coord.), *International Politics & Foreign Policy*, New York, Free Press of Glencoe, 1961, p. 309.

[25] Cfr. Karl Deutsch, *Política y gobierno*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976, p. 53.

[26] Cfr. Soledad Loaeza. "Nacionalismo y democracia en México: tensión entre dos ficciones", en *México; el reclamo democrático*, op. cit., pp. 98-112.

[27] Segovia, op. cit., pp. 103-104.

[28] Según Zavala, un 88% de los ciudadanos dice estar muy orgulloso de ser mexicano, mientras que menos del 2% no siente tal orgullo. Op. cit., pp. 107-108. Por una parte, los universitarios de centros privados se declaran patriotas en un 68% (los de economía en 85% y los de derecho en 89%) Cfr. M. Callejas y R.I. Montes, op. cit, pp. 62-63.

[29] Carlos Arreola, señala al respecto que: "Las dificultades de orden económico que todo país es susceptible de sufrir y que actualmente la mayoría enfrenta, pueden ser superadas siempre y cuando exista una creencia básica en la racionalidad del orden económico y en la legitimidad del sistema político (...) De lo contrario, tanto los individuos como las empresas asumirán un comportamiento económico racional a nivel individual pero desastroso a nivel nacional". En "De la pérdida de confianza en el buen gobierno, 1970-82", en *La vida política mexicana en la crisis*, El Colegio de México, México, 1987.

[30] En su II informe presidencial, López Portillo señaló: "Ya nos conocemos y ya conocemos a los desnacionalizados, a los que ante cualquier parpadeo, frente al asomo del más mínimo riesgo, quienes aseguran sus posiciones y sus posesiones y traman llevarse su dinero. Que se vayan con él, a donde crean que más valga y supongan que ellos valen algo".